

educação e democracia

ESTUDOS DO SÉCULO

XX

número 14 • 2014

**CONTEXTOS PARA REPENSAR LA DEMOCRACIA Y
LA EDUCACION DESDE AMERICA LATINA**

Luis Sime Poma

Luis Sime Poma, PhD Ciencias Sociales, Radboud University of Nijmegen –Holanda.
Profesor principal del Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica
del Perú

“En América Latina tenemos poca tradición en dar cuenta de nuestro quehacer, pasamos de tema en tema, de coyuntura en coyuntura, sin hacer memoria. Nos cuesta asumir nuestra responsabilidad, es decir, responder a alguien (el público, los conciudadanos) por algo (la actividad intelectual)”.
Norbert Lechner¹

Introducción

En este artículo proponemos tres contextos claves para repensar la relación entre democracia y educación, los cuales marcan dramáticamente el desarrollo actual de América Latina y el Caribe (ALC), aunque pueden ser considerados escenarios compartidos en otras regiones del mundo con sus particularidades: la desigualdad y la pobreza; el narcotráfico y la delincuencia; la informalidad y la anomia. En ese sentido, asumimos una perspectiva contextualista para una discusión actualizada sobre la democracia desde aquellas problemáticas que la vulneran y, en torno a las cuales, las ciencias sociales y los enfoques educativos, necesitan aportar sus mejores esfuerzos conceptuales y motivar acciones transformadoras.

La perspectiva contextualista, como forma de reflexión crítica y multidisciplinaria sobre las problemáticas socio históricas, ha tenido una trayectoria en ALC desde la teología de la liberación, la pedagogía crítica, y en los denominados “estudios culturales”. La primera contribuyó a denunciar la pobreza como un problema social y moral²; mientras que la pedagogía crítica, desde el aporte de Paulo Freire, lo hizo con el problema del analfabetismo³; y, los estudios culturales, con la exclusión de sectores indígenas⁴.

Esta perspectiva fue creciendo a medida que se cuestionaban las teorías sociales occidentales como teorías universales por su limitado diálogo con la particularidad de contextos diferentes a Europa y Estados Unidos⁵. El valor que tiene *el lugar* desde donde uno piensa la realidad fue asumiéndose como parte de una conciencia epistemológica para dialogar con los otros y, en lugar de rechazar la comunicación con Occidente, como lo proclamaban ciertas ideologías dogmáticas en la región, construir un contextualismo dialógico e intercultural.

La reflexión contextualista es una reflexión crítica que surge del reconocer problemáticas específicas en las formaciones sociales configuradas por relaciones de

¹ En BACA, Laura y CISNEROS, Isidro - Los intelectuales y los dilemas políticos en el siglo XX. México: FLACSO, 1997, p. 33.

² MULLER, Gerhard. y GUTIÉRREZ, Gustavo - Del lado de los pobres. Lima: CEP-IBC, 2005.

³ OCAMPO, Javier -“Paulo Freire y la pedagogía del oprimido”. Revista Historia de la Educación Latinoamericana, N°10 (2008) p. 57-72.

⁴ WALSH, Catherine (ed.) - Estudios culturales latinoamericanos. Retos desde y sobre la región andina. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar / Abya-Yala, 2003.

⁵ ROJAS, Francisco y ÁLVAREZ-MARÍN, Andrea (eds.) -América Latina y el Caribe: Globalización y conocimiento. Repensar las ciencias sociales. Uruguay: UNESCO-FLACSO, 2011, p.43.

poder e intereses⁶ y subculturas; relaciones que se articulan de manera compleja en niveles distintos hacia dentro y fuera de determinados contextos. De esta forma, la reflexión contextualista nos abre a una aproximación multinivel de los contextos para comprender interactivamente las dinámicas entre lo micro y lo macro, esas idas y vueltas entre lo local-regional-nacional-internacional y las percepciones que tiene la gente sobre las instituciones públicas en esos niveles⁷.

Otra característica de esta reflexión es que no parte tanto de teorías sino de contextos, en la medida que su objetivo es visibilizarlos, documentarlos, problematizarlos y generar preguntas que, con la ayuda de enfoques conceptuales, puedan ser sostenidas como preguntas significativas que motiven respuestas multidisciplinarias y políticas sistémicas. Esta reflexión reconoce que el contexto está estructurado, no sólo por relaciones de fuerza y poder, sino también por voces de rabia, desesperanza y esperanzas políticas.⁸ En esta visión, los contextos no están absolutamente predeterminados, estos son experiencias humanas donde la contingencia y la agencia de los actores están en juego y, en ello, la educación tiene un papel crucial para potenciarlos.

Desde los enfoques educativos, la visión contextualista ha sido influyente en la reflexión curricular, como una forma de cuestionar las orientaciones curriculares distantes de las problemáticas contemporáneas que no ayudan a insertarlas en los planes de estudio. En esa dirección, entendemos la reflexión curricular como la construcción de pertinencias culturales, como el esfuerzo consciente por un *saber situarse* en medio de la simultaneidad, complejidad e incertidumbre de las experiencias sociales. La reflexión curricular se construye como un discurso históricamente informado que reconoce nuestra profunda necesidad de reencontrarnos con la historia y hacernos cargo de procesos históricos a fin de producir saberes contextuales actualizados en las nuevas generaciones⁹.

En las siguientes páginas daremos cuenta de tres macro contextos problemáticos en las sociedades latinoamericanas que acontecen con intensidades diferentes en los países y, desde la cual, articularemos nuestra reflexión sobre democracia y educación, entendiendo la primera como el proceso histórico cada vez más participativo de autoregulación social y autorepresentación política de la sociedad para exigir y ejercer los derechos humanos de todas las personas.

Para cada uno de estos contextos críticos presentaremos una síntesis diagnóstica y, luego, preguntas dirigidas tanto hacia el campo de la investigación multidisciplinaria como para el área de las políticas intervención.

⁶ GROSSBERG, Lawrence - "El corazón de los estudios culturales: Contextualidad, construccionismo y complejidad". Tabula Rasa, N° 10 (2009) p.13-48.

⁷ Existe una tendencia de estudios que dan cuenta de esas percepciones: ARAGÓN, Jorge; MARTÍNEZ, Vania; CÓRDOVA, César; CRUZ, Marylía; GUIBERT, Yamilé - Conflictos Sociales y Representación Política. Lima: IOP-PUCP, 2013. ÁLVAREZ, Leonel; GONZÁLEZ, Guadalupe; BECERRA Jesús - "Índice de Percepción sobre la Gobernabilidad democrática (IPG). El caso de Zacatecas. Una herramienta para medir la calidad de la democracia". CONfines N°13 (2011) p. 113-142

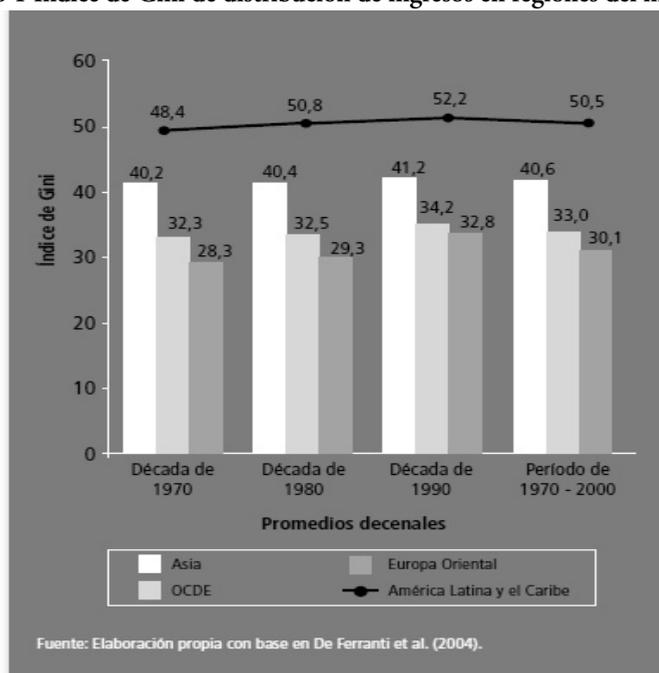
⁸ GROSSBERG, Lawrence - "El corazón...", p. 37.

⁹ SIME, Luis (2009) - "Hacia un currículo para la convivencia". Caderno de Pesquisa: Pensamento Educacional, N°7 (2009) p. 281-296

Desigualdad y pobreza

Este contexto ha caracterizado la historia latinoamericana, representado uno de los mayores desafíos para avanzar en la exigencia y cumplimiento de los derechos sociales y, consolidar así, una ciudadanía social. Como se aprecia en el gráfico 1, en una de las mediciones más comunes para evaluar la desigualdad de ingresos (índice de Gini), ALC aparece en cuatro décadas consecutivas - durante gobiernos ubicados en diferentes opciones políticas- con un nivel mayor de desigualdad respecto a otras regiones. Estadísticas más recientes revelan que durante la última década esto ha mejorado, al igual que el descenso de la pobreza como se observa en el gráfico 2, pero aún se necesita consolidar esta mejoría en las siguientes décadas para revertir esa tendencia histórica: todavía 68 millones de personas – más que la población de España y Portugal¹⁰- sobreviven en la indigencia, es decir, en la pobreza extrema; y uno de cada seis menores de edad es parte de esta condición social¹¹.

Gráfico 1 Índice de Gini de distribución de ingresos en regiones del mundo ¹²

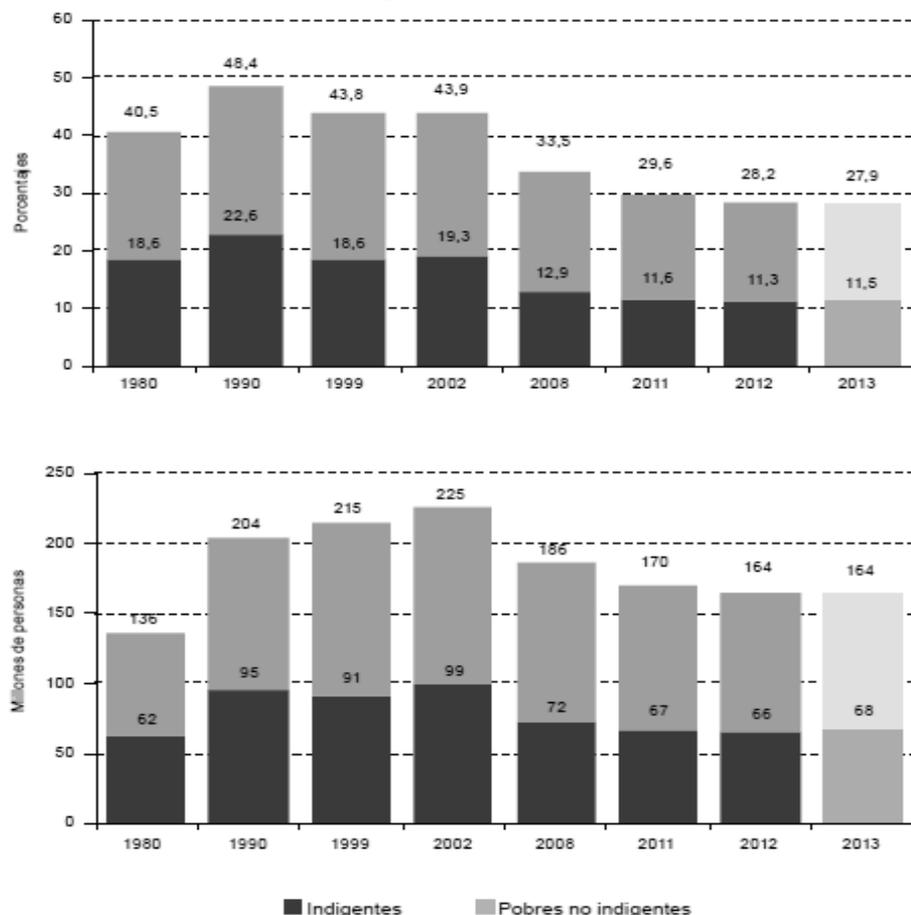


¹⁰ Ambas suman aproximadamente 57 millones. cf. INE - España en cifras 2013. Madrid: INE, 2013 p.2.

¹¹ CEPAL-Panorama Social de América Latina 2013. Santiago de Chile: CEPAL, 2013 p.25.

¹² Un Gini alto corresponde a una distribución que no es equitativa. PNUD - Informe regional sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe 2010. Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. San José: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2010, p. 26

Grafico 2 -Pobreza e indigencia en América Latina 1980-2013 ¹³



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. Estimación correspondiente a 18 países de la región más Haití. Las cifras que aparecen sobre las secciones superiores de las barras representan el porcentaje y el número total de personas pobres (indigentes más pobres no indigentes). Las cifras relativas a 2013 corresponden a una proyección.

Desde un enfoque territorial acorde con la urbanización que ALC ha experimentado desde mediados del siglo pasado, la desigualdad y la pobreza se han reproducido de formas distintas en las ciudades. Aplicando el mismo indicador de Gini, cuatro ciudades del Brasil -Brasilia, Curitiba, Fortaleza y Salvador- son las más desiguales de Latinoamérica. El decil más rico en las primeras ciudades tenía en el 2009, ingresos 88.6 veces más que el decil

¹³ CEPAL - Panorama Social..., p.16

más pobre, casi dos veces la media nacional de Brasil. También se observan ciudades en la región cuya desigualdad se ha reducido en estas últimas décadas, cuestión vinculada a la emergencia de la clase media, pero en general todavía las ciudades de ALC están por encima de la media mundial¹⁴. La desigualdad aún existente se revela en los ámbitos urbanos segregados, con grandes diferencias entre los tipos de vivienda, transporte, educación y consumo para sectores que cohabitan en la misma ciudad, disminuyendo lo “público” como espacio de cohesión social. En el lado más marginalizado de las ciudades se encuentran los “tugurios”, zonas con viviendas muy precarias en condiciones sociales deplorables. A inicios de esta década, el 23.5 por ciento de los habitantes urbanos de ALC todavía se localizan en estas zonas, del 33.7 por ciento en el año 1990¹⁵.

A pesar de los avances institucionales en la democracia representativa durante las tres últimas décadas -diversos países presentan una continuidad inédita de regímenes democráticos- ALC sigue siendo una de las regiones del mundo con mayores desigualdades sociales y niveles de pobreza, generándose una insatisfacción en parte de los ciudadanos respecto a los beneficios sociales de vivir bajo regímenes democráticos, con la tentación en un sector de la población de creer que habrán mejores condiciones sociales en regímenes autoritarios¹⁶.

La desigualdad y la pobreza son producto de estructuras sociales y culturales que han restringido el acceso a bienes y servicios públicos para sectores de la población produciendo una inequitativa distribución de ellos y falta de oportunidades que ha persistido de forma intergeneracional. No obstante, uno de los servicios que se ha logrado universalizar más en su acceso es la educación primaria y secundaria, así, aproximadamente el 96 por ciento de los niños entre 6 y 12 años de edad se encuentran con matrícula en algún establecimiento educativo, disminuyendo a 82 por ciento para el grupo de edad de 13 a 17 años y a un 36 por ciento para los jóvenes de 18 a 23 años, estos últimos más ubicados en el rango de la educación pos secundaria¹⁷. Esta mayor universalización está heterogéneamente influida por el nivel educativo y socioeconómico de las familias, así como por su ubicación territorial (urbano-rural) y su origen étnico-racial, variables fundamentales que afectan el acceso, permanencia de los hijos en la escuela, así como, el éxito en sus aprendizajes. Como patrón de correlaciones, tendrán menores oportunidades para acceder y finalizar con éxito a toda la educación básica y superior los hijos de familias cuyos padres tienen menor nivel de educación formal, menores recursos económicos, están ubicados en zonas urbanas marginales o rurales y procedan de determinadas comunidades indígenas. Los municipios

¹⁴ ONU Hábitat - Construcción de ciudades más equitativas: políticas públicas para la inclusión en América Latina. Colombia: ONU Hábitat, 2014, p.61

¹⁵ Idem, p. 105

¹⁶ AGUILAR, Ileana; BENAVIDES, Tatiana - “Enfoques y tendencias en el análisis de los procesos de democratización en América Latina”. En ROJAS, Francisco y ÁLVAREZ-MARÍN, Andrea (eds.) -América Latina y el Caribe: Globalización y conocimiento. Repensar las ciencias sociales. Uruguay: UNESCO-FLACSO, 2011, p.197-232

¹⁷ PNUD - Informe regional 2010..., p. 71

con mayor tasa de analfabetismo en Brasil tienen una proporción de 71 por ciento de población autodefinida como perteneciente a pueblos originarios o afrodescendiente, ocurriendo algo similar en otros países como Guatemala y Perú.¹⁸

Una de las funciones de las políticas públicas en democracia es que a través de ellas se logren mejores condiciones que en regímenes autoritarios para exigir y ejercer derechos sociales esenciales como el de la educación básica y que esta sea un servicio de calidad que asegure aprendizajes relevantes para el trabajo y la vida. Sin embargo, no todos los sectores de la sociedad tienen las mismas condiciones para exigirlo y ejercerlo y, en no pocas veces, cuando lo hacen desbordan los propios cauces democráticos por la débil institucionalidad para canalizarlos, creándose situaciones altamente conflictivas.

La debilidad de los servicios públicos y la penetración excesiva de políticas de mercado en el ámbito educativo ha agudizado la desigualdad de acceso y de resultados en el sistema educativo, donde la baja calidad de la oferta está asociada al sector estatal y la mejor calidad al sector privado, como también ocurre con el sistema de salud. La creciente privatización de la educación superior y básica en ALC ha canalizado una forma de salir de la pobreza para sectores que emergen como clase media vinculándose a la oferta educativa privada ante el declive de la educación estatal, aunque sean discutibles la calidad que ofrece un segmento de la educación privada donde en pruebas como las de PISA no siempre salen mejor que las escuelas públicas o con ventajas significativas¹⁹. A diferencia de otras regiones del mundo, como en Europa, en ALC, la clase media se configura por fuera de los servicios públicos, dinamizando un mercado privado de oferta-demanda de dichos servicios donde ha sido difícil para diversos Estados su regulación a normas de calidad: “Las clases medias tienen la percepción de ser soportes, con su renta y con su gasto, de gran parte de los servicios públicos, mientras que luego tienen que buscar en el sector privado la calidad en la educación y la salud”²⁰.

Desde este contexto: ¿cómo comprender de manera más dialéctica la relación entre la desigualdad y la pobreza de estas sociedades con sus sistemas educativos? El sentido de esta pregunta está dirigido a evitar una relación unidireccional entre desigualdad-pobreza y educación y, más bien, justificar enfoques más bidireccionales, donde veamos no solo cómo los sistemas educativos reproducen la desigualdad y pobreza de sus sociedades, sino como ellos, en su interior, generan otras desigualdades –influido en parte por la percepción pesimista de los docentes sobre los aprendizajes de los alumnos pobres²¹- o también como la revierten – en los casos de escuelas pobres que logran

¹⁸ RIMISP - Pobreza y desigualdad. Informe Latinoamericano 2011. Santiago de Chile: Rimisp-IDRC-FIDA, 2012, p. 17

¹⁹ BÁRCENA, Alicia; SERRA, Narcís (ed.) - Clases medias y desarrollo en América Latina. Santiago de Chile: CEPAL- CIDOB, 2010, p. 245.

²⁰ Idem, p. 8

²¹ TENTI, Emilio (coord.) - Opiniones, percepciones y expectativas de los docentes bonaerenses. Encuesta a docentes de la provincia de Buenos Aires. B. Aires: Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires- IPE-UNESCO Sede Buenos Aires, 2010, p. 24

mejores puntajes en las pruebas que otras²²- y, también, como ellos pueden contribuir junto a otros factores a disminuir esos problemas no solo en el largo plazo a través, por ejemplo, de los programas sociales de apoyo directo a las zonas más pobres de un país.

¿Salir de la pobreza para entrar a dónde? El problema social no es solo salir de la pobreza monetaria y aumentar los ingresos de los sectores más pobres. La pobreza tiene un carácter multidimensional. Se trata de salir de un modo de vida precario y limitado en opciones de elección para entrar en un modo de vida más informado para decidir con libertad y responsabilidad sobre un rango mayor de opciones: qué método de planificación familiar adoptar, qué tipo de alimentación y de ocio es más saludable, qué acciones son más ecológicas, etc. En esta línea, la democracia como proyecto social necesita fusionarse con otros proyectos como el de sociedad saludable, sustentable y educadora. Esto es un desafío a la intersectorialidad de las políticas públicas y a la concepción integral del desarrollo humano. Simplificando, la cuestión es no pasar de la desnutrición a la malnutrición, del hambre a la obesidad, donde los mayores ingresos económicos se destinen a un consumo poco saludable que después agudizan los problemas de salud pública. En varios países, como el Perú, en uno de los programas sociales de apoyo directo a los más pobres (programas de transferencias condicionadas) no solo se entrega dinero mensual a las madres de familia, sino también, se les exige comprometerse con la asistencia regular de sus hijos a la escuela y a controles médicos, así como a capacitaciones sobre salud reproductiva y nutrición²³.

¿Cómo desarrollar políticas públicas para disminuir la pobreza que superen las tentaciones paternalistas y clientelistas de los partidos en los gobiernos locales y nacionales? Esta interrogante representa todo un cambio en la concepción del poder que la democracia debe acentuar como procesos de participativos basados en el desarrollo de las capacidades de las personas e instituciones, buscando evitar formas de aprovechamiento de las políticas públicas solo para fines electorales o para ganar masas incondicionales. Desde esta mirada, la cuestión no es solo el salir de la pobreza sino el cómo se sale de ella, y pueden haber formas propiciadas por los propios partidos políticos democráticos que son muy manipuladoras de las necesidades de los sectores más pobres.

¿Cómo gobernar democráticamente sistemas educativos en contextos muy heterogéneos de desigualdad y de pobreza? Sintetizaremos algunos planteamientos que pueden contribuir a la respuesta a esta compleja pregunta. Las políticas de democratización de la educación para todos requieren ser pensadas como: a) parte de un proceso histórico de universalización de derechos humanos básicos b) formas de empoderamiento de sectores más excluidos de los bienes públicos a través de políticas de discriminación positiva c) pactos vinculantes y evaluables entre el sector educativo estatal y privado para garantizar educación de calidad para todos d) estrategias

²² RACZYNSKI, Dagmar; MUÑOZ, Gonzalo - Efectividad Escolar y Cambio Educativo en Contextos de Pobreza. Santiago de Chile: Ministerio de Educación, 2005, p.107

²³ ARROYO, Juan - Estudio cualitativo de los efectos del programa juntos en los cambios de comportamiento de los hogares beneficiarios en el distrito de Chuschi: avances y evidencias. Lima: JUNTOS, 2010, p.7.

sinérgicas entre los diferentes sectores del Estado (Ministerios de salud, educación y trabajo y otros) para prevenir y revertir la pobreza desde dentro y fuera del sistema educativo e) pactos entre los gobiernos y sindicatos docentes para impedir que los conflictos entre ambos empeore la educación pública y la credibilidad de ambos ante la sociedad e) currículos que refuercen la creatividad y el emprendimiento para el trabajo.

Narcotráfico y delincuencia

Este contexto es uno de los más problemáticos en la región, con múltiples impactos en diversas áreas de las sociedades y sus Estados y, pone por delante, la lucha por el derecho a la seguridad pública desde el nivel local hasta el nacional e internacional.

Diferenciaremos el narcotráfico de la delincuencia que se mueve en las calles de ALC por otros móviles no vinculados con la producción y comercialización de las drogas, sino con el robo de objetos o secuestro de personas a cambio de dinero, y ambas se diferencian de las “pandillas”, grupos juveniles que buscan el dominio de un territorio con diferentes grados de violencia aunque pueden verse involucrados en acciones de los primeros como en el caso de Centroamérica.

El narcotráfico representa niveles avanzados de organización criminal con redes a nivel local-nacional-internacional; funcionan como empresas transnacionales con una fuerte identidad corporativa y mecanismos sofisticados y violentos para manipular personas, dineros y territorios, que los ha convertido en la más rentable economía criminal del mundo²⁴. El valor de la cocaína, durante su cadena de producción desde el inicio hasta el final, logra un aumento espectacular de 500 veces²⁵. El narcotráfico nos revela un lado perverso de la globalización, en la medida que conecta a diversas regiones del mundo en una economía híbrida muy compleja, donde lo ilegal interactúa con la parte legal de las economías, como es el caso del “lavado” o “blanqueamiento” de las ganancias ilícitas en empresas lícitas.

El narcotráfico aprendió a operar con flexibilidad negociando con socios distintos: penetró en regímenes de diverso color político, como en la década de los ochenta del siglo pasado, donde uno de los narcotraficantes más famosos de Colombia utilizaba los aeropuertos de la Nicaragua Sandinista y de la Cuba Socialista como una ruta segura para acceder al mercado norteamericano²⁶. En décadas posteriores, se dieron diversas formas de relación entre el narcotráfico con movimientos armados autodenominados “revolucionarios” que practican el terrorismo en Colombia y el Perú y que han devenido en lo que se ha caracterizado como “narcoterrorismo”, concepto que nos remite tanto a los actos terroristas que realizan los grupos narcotraficantes como a los vínculos con el tráfico ilegal de drogas de las organizaciones armadas subversivas que actúan con actos terroristas.

²⁴ PONTÓN, Daniel –“La economía del narcotráfico y su dinámica en América Latina”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales. N° 47, 2013, p. 137.

²⁵ OEA - El problema de las drogas en las Américas 2013. New York: OEA, 2013, p. 56.

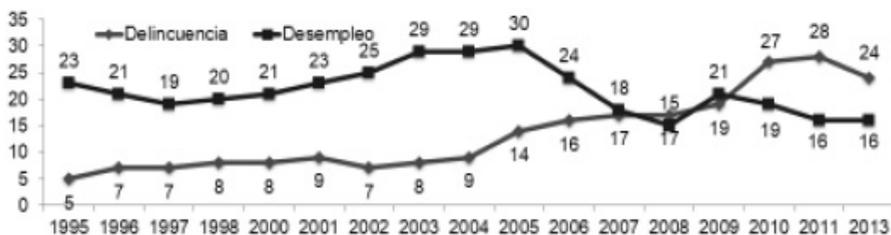
²⁶ Ver los testimonios que brinda uno de los más cercanos seguidores del narcotraficante Pablo Escobar en: LEGARDA, Astrid. El verdadero Pablo-Sangre, traición y muerte. Bogotá: Ediciones Dipon, 2005.

Una de las drogas que involucra más a ALC en el narcotráfico es la cocaína, para lo cual se utiliza la ancestral hoja de coca cultivada en el Perú, Colombia y Bolivia; países de donde proviene la cocaína consumida mundialmente, como producto final o en alguna etapa de su elaboración. El principal destino de la cocaína es Estados Unidos y Europa, utilizándose como rutas para el primero a países de Centroamérica y México, los que justamente viven una alarmante violencia generada por las guerras entre los propios narcotraficantes y con las fuerzas policiales. El Gobierno Mexicano estimó que durante el periodo 2006-2012 murieron aproximadamente 60 mil personas, como resultado de ejecuciones, enfrentamientos entre bandas rivales y agresiones a la autoridad de ese país por parte de las organizaciones del narcotráfico²⁷. Vale añadir que el narcotráfico se vincula además con otras redes ilegales: de armas y de químicos para procesar la cocaína²⁸.

La percepción de los latinoamericanos sobre la delincuencia ha variado ostensiblemente (ver gráfico 3), representando hoy el principal problema, más que el desempleo, lo cual acrecienta la sensación de temor y el sentimiento de inseguridad pública, sobre todo cuando el robo se ejecuta con armas de fuego y viene acompañado de violencia, como en el caso de Argentina donde el uso de armas de fuego en los robos es aproximadamente el 80 por ciento, a diferencia de Chile donde llega al 36 por ciento²⁹.

Gráfico 3 Evolución de problemas más importantes: delincuencia y desempleo³⁰

Pregunta: ¿Cuál considera Ud. que es el problema más importante en el país. Aquí solo “desempleo” y “delincuencia”.



La desconfianza de la población ante las autoridades y policías, las limitaciones del sistema de penalización y el temor, hace que una parte importante de los robos no sean reportados, como en el caso de Colombia donde más del 70 por ciento de hurtos a personas y casas no es denunciado³¹. Este contexto concatena una serie de consecuencias sociales, políticas y económicas: “a mayor temor, mayores serán las

²⁷ OEA - El problema..., p. 87.

²⁸ Idem, p. 81.

²⁹ PNUD - Informe Regional de Desarrollo Humano 2013. Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. Nueva York: PNUD, 2103, p.61.

³⁰ Corporación Latinobarómetro - Informe 2013. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro, 2013, p.61.

³¹ PNUD - Informe Regional 2013..., p. 57.

demandas por seguridad, como consecuencia los gobiernos suelen responder con mayor control, reflejado en la promesa de más policías y más cárceles, lo cual no sólo no resuelve el problema, sino que también implica mayores costos económicos, y cuando la promesa no se cumple, erosiona la legitimidad y la confianza en las instituciones públicas. Esto a su vez erosiona la gobernabilidad”.³²

El narcotráfico y la delincuencia constituyen una de las amenazas más serias a la democracia y a la vida de sus habitantes, cuyo aumento ha empeorado las muertes por homicidio. Once de los veinte países más violentos del mundo pertenecen a la región (ver tabla 1).

Tabla 1 –Tasa de homicidios en países más violentos del mundo por 100.000 habitantes, 2010 ³³

País	Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes
Honduras	82,1
El Salvador	66,0
Costa de Marfil	56,9
Jamaica	52,1
Venezuela	49,0
Belice	41,7
Guatemala	41,4
San Cristóbal y Nieves	38,2
Zambia	38,0
Uganda	36,3
Malawi	36,0
Trinidad y Tobago	35,2
Sudáfrica	33,8
Lesoto	33,6
Colombia	33,4
República Democrática del Congo	30,8
República Centroafricana	29,3
Bahamas	28,0
Puerto Rico	26,2
Etiopía	25,0

Fuente: Unodc, 2011.

³² LAGOS, Marta; DAMMERT, Lucía - La Seguridad Ciudadana. El problema principal de América Latina. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro, 2012, p.35.

³³ GODNICK, William y BUSTAMANTE Julián. “El tráfico de armas de fuego en América Latina y el Caribe: mitos, realidades y vacíos en la agenda internacional de investigación”. En NIÑO, Catalina (ed.) -Anuario 2013 de la Seguridad Regional en América Latina y el Caribe. Colombia: Friedrich Ebert, 2013, p.279.

Actualmente, la seguridad pública es uno de los bienes públicos más difíciles de garantizar para gobiernos de cualquier color político, generando una privatización de la seguridad ante la debilidad del Estado por controlarla. Ello se evidencia desde aquellos actos de linchamiento público o torturas a los delincuentes menores en comunidades locales que toman la justicia por sus propias manos, hasta la contratación de vigilantes particulares para custodiar casas y empresas, que en ciertos países –como en Guatemala y Honduras- terminan siendo en número mayor que la policía³⁴. Por otro lado, los gastos en torno a los problemas de seguridad, desvían parte de los ingresos de las familias, las empresas privadas y organismos públicos que podrían destinarse para mejorar el estándar de vida de la población.

Desde este segundo contexto: ¿cómo, dónde y a quiénes reclutan el narcotráfico y la delincuencia para reproducirse como organización? Estas organizaciones para expandirse requieren de “personal calificado” y, también, para reemplazar a los detenidos, lesionados o muertos. Aún se requieren más estudios para establecer correlaciones más sólidas sobre el perfil de las personas que se involucran en ambos delitos. La condición de joven desempleado no explica suficientemente ese perfil; el PNUD ensaya otras vías para identificar esas características como los cambios críticos que están ocurriendo en la familia, la escuela y la ciudad, que son espacios para el control social y funcionan como inhibidoras del crimen. La misma fuente revela en un estudio en 6 países de la región, la fractura familiar que hay detrás: más de un tercio de los detenidos en cárceles, dejaron su casa antes de los 15 años y el 21.2 por ciento nunca conoció a sus padres; en México, la baja escolaridad de las personas que cometen delitos es también una característica; el tipo de urbanización desordenado y excluyente de las ciudades es un factor igualmente asociado al incremento de la violencia delictiva³⁵.

¿Qué significa el narcotráfico y la delincuencia en términos ideológicos? Ambos se mueven en el campo de la ilegalidad, se organizan material y subjetivamente para trasgredirla e instrumentalizar las condiciones que encuentran para evitar ser reconocidos y capturados. Si asumimos que la ideología es un espacio de pugna de discursos que pretenden organizar las subjetividades, podemos estimar que desde la práctica de ellos hay un mensaje que cuestiona el papel de la educación como vehículo de movilidad social y de desarrollo personal. Desde esas organizaciones surge una “alternativa” a la educación formalizada por el Estado y sus promesas modernas, en su lugar, legitiman otra vía, donde no es necesario largos años de estudio y esfuerzos para obtener una credencial técnica o profesional. Son grupos que resuelven en el corto plazo la necesidad de ingresos económicos, que en el imaginario pueden ser muy crecientes y seductores, crean sus redes de protección y de prestigio interno e incluso inspiran leyendas, canciones y novelas

³⁴ROJAS Francisco -“Violencia en América Latina: La inequidad, el crimen organizado y la debilidad estatal inhiben el desarrollo humano”. En ROJAS, Francisco; ÁLVAREZ-MARÍN, ANDREA. (eds.) América Latina y el Caribe: Globalización y conocimiento. Repensar las ciencias sociales. Montevideo: UNESCO-FLACSO, 2011, p.335.

³⁵ PNUD - Informe Regional 2013..., p.27-30.

(¿narcocultura?). Necesitamos explorar más las percepciones de los jóvenes sobre el delincuente y el narcotraficante y, en general, sobre las drogas³⁶ así como "entender la ideología de los narcotraficantes latinoamericanos que no consideran que su actividad económica suponga un perjuicio para las economías y las sociedades de sus países"³⁷

¿Cómo prevenir desde las políticas públicas el narcotráfico y delincuencia? Son fundamentales las políticas que apunten a impedir la impunidad de los delitos, para disuadir a su reproducción por más personas y evitar que las democracias terminen siendo derrotadas no por dictaduras militares, como era antes, sino por mafias del crimen organizado que articulan redes de corrupción transversales en el Estado: desde el policía de la calle hasta un juez de alto nivel, para evitar ser sancionados o lograr penas menores. La fragilidad de las democracias latinoamericanas para enfrentar los problemas de la inseguridad puede alimentar la idea que solo con regímenes autoritarios o con libertades restringidas es posible controlar dicho problema. Así, en una encuesta nacional a más de 7 mil mexicanos, el 28 por ciento señaló que es necesario perder algunas libertades y derechos para acabar con el narcotráfico³⁸. Entre las tareas de prevención, son muy importantes las instancias del Estado y la sociedad civil que realizan un seguimiento a estas problemáticas, reportando diagnósticos sobre el consumo de drogas ilícitas y el estado de la delincuencia, como son los observatorios de seguridad ciudadana que en diversas ciudades de ALC se han implementado³⁹.

En términos educativos puntualizaremos dos corrientes que son parte de esta tarea de prevención que incluye tanto la educación dentro de las organizaciones educativas como en otros ámbitos: la educación para la prevención del consumo de drogas y la educación penitenciaria. La primera, asumida por varios Ministerios de Educación en la región⁴⁰, forma parte de estrategias nacionales de lucha contra las drogas ilegales, que requieren de mayor inversión y personal especializado para sostenerse descentralizadamente y asumida por los líderes locales y nacionales. En cuanto a la segunda, que acontece en las cárceles, se presenta deficitaria siendo tan relevante su impacto para impedir que los detenidos en lugar de reeducarse para no cometer más delitos, lo sigan realizando inclusive desde las propias cárceles y con mayor astucia. En Argentina, Chile y Brasil, los delincuentes que

³⁶ En un estudio en 6 países de América del Sur, en estudiantes de secundaria se concluyó que tenían una baja percepción del riesgo de sustancias como el alcohol, tabaco y marihuana en esa población escolar. CICAD - Informe subregional sobre uso de drogas en población escolarizada. Washington: ONUDD, 2010, p. 10

³⁷ OVALLE, Lilian - "Narcotráfico y poder. Campo de lucha por la legitimidad". Athenea Digital, N° 17 (2010), p.83

³⁸ BENÍTEZ, Raúl (ed.) - Encuesta Ciudadanía, Democracia y Narcoviolenia (CIDENA)2011, 2012. México: CIDENA, 2012, p.21.

³⁹ Como en Uruguay el Observatorio Fundapro de la Seguridad. (<http://seguridad.observatorionfundapro.com/>) y en Bolivia el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (<http://www.onsc.gob.bo/>)

⁴⁰ Como en el caso de Argentina a través del Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas (http://portal.educacion.gov.ar/?page_id=321) o en el Perú con el Programa de Prevención del Consumo de Drogas en población escolar (http://ditoc.minedu.gob.pe/Materiales%20DITOE/Lineamientos_para_una_vida_sin_drogas.pdf)

reinciden superan aproximadamente el 40 por ciento⁴¹. Un ejemplo alentador de intervención es el aplicado desde el 2005 en el Brasil – la cuarta población penitenciaria del mundo y donde casi el 70 por ciento de esta población no posee educación primaria completa y solo el 18 por ciento participaba de actividades educativas- entre el Ministerio de Justicia y Educación, llamado “Proyecto Educando para la Libertad”.⁴²

Informalidad y anomía social

Este tercer contexto nos lleva al campo de los derechos laborales y de las economías de las sociedades latinoamericanas pero también a un modo de operar anómico sobre la realidad cotidiana, es decir, a conductas que tienden a otras formas irregulares de relación con el Estado, el mercado y con los Otros. El *nivel de anomía* de la sociedad es una variable sustancial para comprender cómo determinadas prácticas sociales tienden a flexibilizar las normas convencionales de convivencia y construyen códigos arbitrarios para evadirlas en función de los intereses de los actores implicados. La cotidianidad de estas prácticas reflejan una cultura de la trasgresión a las normas, sea por desconocimiento de ellas, sobre todo las legales, o por una deliberada acción para ir contra ellas. Mientras más anómica sea una sociedad las normas de convivencia serán más vulnerables y la confianza del Estado como garante de las normas será menor. Esta falta de vigencia de las normas y reglas en la vida cotidiana debilita la integración y cohesión social, haciendo más impredecible la conducta del otro, construyéndose una moral “asocial”: sin obligaciones, culpas, sanciones y reciprocidades⁴³.

Por ello, consideramos la informalidad social como un rasgo de sociedades anómicas donde el Estado y el mercado no han generado culturas autoregulatorias con los adecuados incentivos y penalidades -económicos y no económicos-, así como de la supervisión necesaria para que las personas y las instituciones asuman que es mejor actuar dentro de normas de convivencia autoreguladas que fuera de esta en la medida que todos se benefician. Esto produce lógicas sociales paralelas que coexisten con diversos grados de conflictividad entre ellas. Así, para cada sector de la economía ha surgido un mercado oficial o formal y otro mercado informal o “subterráneo”. De Soto⁴⁴, uno de los autores que más influencia ha tenido sobre el tema de la informalidad en la región, da cuenta ya en su libro de fines de los ochenta de las singularidades de la informalidad en el sector de la vivienda, el comercio y el transporte, así como los costos

⁴¹ PNUD - Informe Regional 2013..., p.129

⁴² UNESCO -Educación en Prisiones en Latinoamérica: derechos, libertad y ciudadanía. Brasilia: UNESCO, 2008. p. 17

⁴³ ACEITUNO, Roberto et al. –“Anomía y Alienación en Estudiantes Secundarios de Santiago de Chile”. Psykhe N°2 (2009), p. 3-18 . VERA, José Ángel; BAUTISTA, Gildardo; RAMIREZ, Manuel y YANEZ, Adrian Israel –“ Relación entre anomía social, alienación y conducta antisocial en jóvenes infractores mexicanos”. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud N°2 (2012) p. 943-955.

⁴⁴ DE SOTO, Hernando - El Otro Sendero: La Revolución Informal. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1986.

de la informalidad y las potencialidades de dichos actores versus la ineficiencia del Estado para canalizar ese potencial debido a las trabas burocráticas y legales que impone para transitar a la formalidad.

La economía informal, aquella donde las relaciones laborales no se sujetan a la legislación laboral, representó el 64 por ciento del empleo urbano en el 2008 en Latinoamérica, cinco por ciento más que en 1990⁴⁵. Una lectura más precisa de este fenómeno es la que nos ofrece el PNUD en la tabla 1, donde si bien se nota un relativo descenso de la informalidad urbana en casi una década, está se encuentra todavía por encima del 40 por ciento en la mayoría de países de la región, siendo mayor para el caso de las mujeres.

Tabla 2 - Población ocupada en la economía informal en áreas urbanas en América Latina⁴⁶

País	1999			2008		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Argentina	42,4	39,5	42,6
Bolivia (Estado Plurinacional de)	64,2	55,5	75,3	62,5*	57,7*	71,6*
Brasil	47,4	43,8	52,6	42,0	37,8	47,4
Chile	31,8**	27,2**	39,2**
Costa Rica	41,6	39,5	45,0	37,1	33,9	41,4
Ecuador	58,9	55,0	65,2	57,4	53,0	63,6
El Salvador	52,3	45,7	59,7
Honduras	55,2	52,4	58,5	43,9*	45,4*	41,9*
México	43,7	40,0	49,1
Panamá	34,2	32,3	37,0	35,9	33,5	39,3
Paraguay	59,2	51,9	69,2	56,5	50,1	65,4
Perú	64,1	58,7	71,1	59,3	52,9	67,1
República Dominicana	50,1	51,9	47,1
Uruguay	41,5	38,6	45,4	42,8	38,2	48,5
Venezuela (República Bolivariana de)	53,8	54,6	52,2	49,8***	51,8***	46,7***

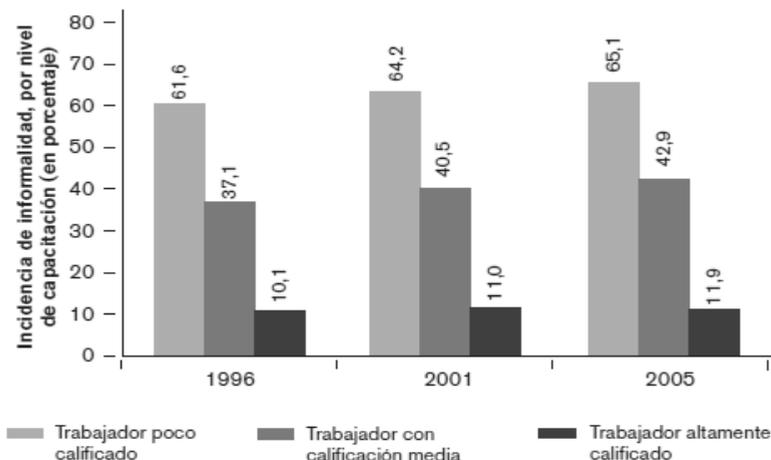
Nota: El cuadro muestra a la población ocupada en la economía informal como porcentaje del total de ocupados en las áreas urbanas.
 * Dato disponible para el año 2007.
 ** Dato disponible para el año 2000.
 *** El dato refiere al total nacional.
 Fuente: CEPAL, Estadísticas de América Latina y el Caribe (CEPALSTAT).

⁴⁵ TOKMAN, Víctor - "Informalidad en América Latina: balance y perspectivas de políticas". Realidad, datos y espacio. Revista internacional de estadística y geografía. N°3(2011) p.19.

⁴⁶ PNUD - Informe regional sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe 2010. Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. San José, C.R.: PNUD, 2010, p.33

Detrás de este tipo de economía se ubican una variedad de formas de empleos: el trabajo por cuenta propia o autoempleo, empresas mayormente pequeñas y familiares, donde no existen contratos laborales que regulen el trabajo (horarios, vacaciones y otros beneficios) y la protección social derivada de las cotizaciones de la empresa (pensión y salud), así como, tampoco son sujetos de tributación al Estado, en tanto no están registradas de forma convencional y también están excluidos del sistema bancario. Los estudios indican que se trata de empleos con bajos salarios y productividad, y asumidos por personas con menor nivel de capacitación (ver gráfico 5). Adicionalmente, se trata de actividades económicas que no solo están ajenas a la regulación laboral sino también a normas y controles de protección ambiental. En el caso de la minería informal, las externalidades negativas hacia la salud y el medio ambiente son cuantiosas por la alta contaminación de las personas y los ríos, así como la destrucción de bosques⁴⁷.

Gráfico 5 - Incidencia de informalidad por nivel de capacitación ⁴⁸
(En relación con el empleo total, en porcentaje)



Nota: En el gráfico se muestra la parte correspondiente a los trabajadores empleados en el sector informal como porcentaje del empleo total por nivel de capacitación. La informalidad abarca los trabajadores asalariados en empresas pequeñas, los trabajadores autónomos no profesionales y los trabajadores con ingreso cero. Países incluidos: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Fuente: *Estimaciones del IIEL basadas en la base de datos sobre informalidad del IIEL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).*

⁴⁷ OSORES, Fernando; ROJAS, Jesús; MANRIQUE, Carlos - Minería informal e ilegal y contaminación con mercurio en Madre de Dios: Un problema de salud pública. *Acta Médica Peruana*, N°1, 2012, p.38-42.

⁴⁸ EKKEHARD, Marc; BUSTAMANTE, Juana. - La globalización y el empleo informal en los países en desarrollo. Ginebra: OIT-OMC, 2009, p. 35.

La discusión que ha generado este concepto de economía informal permite ampliar su significado y cruzarse en parte con otro concepto que es el de “economía sumergida”, para dar cuenta de las actividades económicas que incumplen deliberadamente con normas laborales y tributarias, por ejemplo, la protección social de los trabajadores, salario mínimo, cantidad máxima de horas de trabajo, el pago de impuestos y otras regulaciones. Perone⁴⁹ enfatiza la diferencia entre economía informal y economía sumergida en la voluntad del actor:

Economía sumergida o en negro alude al conjunto de actividades que se sustraen al conocimiento y al control del estado por razones que van desde la evasión de las leyes y de los contratos colectivos de trabajo a la evasión fiscal: en todo caso a la finalidad de evitar la aplicación de normas.

La economía informal consiste en actividades cuyo desarrollo no obedece necesariamente a intentos evasivos, al deliberado propósito de no respetar o deformar las normas que regulan las actividades mismas, aun cuando estas actividades vengan a colocarse en plano distinto de aquél de las actividades económicas formalmente disciplinadas.

Autores como Schneider han medido la economía sumergida de 162 países del mundo, representando esta, el 34.7 por ciento de la economía latinoamericana en contraste con el 13.4 por ciento en los países de altos ingresos de la OECD. En la tabla siguiente figuran los países cuya economía sumergida representa todavía más de la mitad de su economía.

Tabla 3 - Países de América Latina y el Caribe con mayor economía sumergida ⁵⁰

Países	1999	2007 o 2006	Promedio
Bolivia	67.3%	63.5%	66.1%
Panamá	64.8%	60.0%	63.5%
Perú	60.1%	53.7%	58.0%
Haití	54.8%	57.1%	56.4%

Con ese mismo criterio del interés deliberado del actor se distingue la economía criminal como el narcotráfico que justamente trafica intencionadamente con productos considerados ilegales y penalizados.

Desde las características de este contexto surgen algunas interrogantes: ¿cómo interactúan las diversos tipos de economía en las sociedades latinoamericanas? No obstante las diferencias entre economía informal, economía sumergida, economía formal y economía criminal, la realidad latinoamericana nos muestra fronteras no siempre muy delimitadas entre ellas, por ejemplo, actores de la economía criminal penetran la economía formal e informal para lavar dinero de sus negocios ilícitos o buscan formas diversas de

⁴⁹ PERONE, Gian Carlo - “Economía Informal, Trabajo Sumergido y Derecho del Trabajo”. Revista: Gaceta Laboral, N° 2 (2007), p.155.

⁵⁰ SCHNEIDER, Friedrich; BUEHN, Andreas; MONTENEGRO, Claudio - “New Estimates for the Shadow Economies all over the World”. International Economic Journal N° 4 (2010), p. 454-456.

aprovechar de dichas economías, como ha sido denunciado en los narcotraficantes de México involucrados en la minería: en algunos casos cobran a las empresas una cuota por cada tonelada de minerales que extraen; en otros les obligan a utilizar sus camiones para transportarlos y en algunos más exigen a los propietarios de yacimientos mineros a prestar sus permisos de explotación para exportar de forma legal el producto⁵¹. A su vez, Durand, llama la atención para el caso peruano del crecimiento de la economía delictiva, como el narcotráfico, el contrabando y la piratería; la cual contamina la economía formal e informal⁵². Esta economía usa la violencia, el chantaje y la corrupción como mecanismos para interactuar con las otras economías; en cambio la economía informal tiende más a utilizar la coima o soborno y la presión social en su relación con el Estado, para flexibilizar los controles de este y así poder sobrevivir⁵³. La globalización nos lleva a redimensionar la pregunta inicial: ¿cómo interactúan esas economías con la economía mundial? En países de ALC, la apertura al comercio internacional ha significado un tipo de competencia basada en la reducción de costos de la mano de obra aprovechando de la economía informal⁵⁴. Esta configuración de las economías latinoamericanas con matices de acuerdo a los países es muy relevante para comprender los problemas de la gobernabilidad democrática en la región dada la multiplicidad de conflictos de intereses ubicados en distintas racionalidades económicas, y las limitaciones del Estado para garantizar una ciudadanía laboral con protección social.

¿Cómo abordar desde la educación la lucha por formalizar más las economías, mejorar la ciudadanía laboral y contribuir a reducir la anomia social? Más allá de las políticas macroeconómicas y administrativas para facilitar la formalidad es importante que las políticas de empleo se basen en defender tanto la protección social de los trabajadores - garantizada como ciudadanos más que como trabajadores sobre la base del principio de la universalidad de derechos básicos- como en promover su formación continua laboral. Como observamos previamente la economía informal emplea sectores con poca calificación cuyos bajos ingresos les resta posibilidades de invertir en su propia formación y así mejorar su productividad. Esa calificación es producto de un conocimiento práctico adquirido para un trabajo en el mundo de las microempresas, condicionado por la transmisión de competencias al interior de la red familiar y específico hacia una actividad puntual.

Desde esta realidad, las políticas de formación laboral son un factor clave de la empleabilidad dado que articula un conjunto de oportunidades de inclusión para que el sujeto desarrolle una carrera personal de aprendizajes y certificaciones laborales a lo largo de su vida. Ello implica generar oportunidades de formación con inversión pública

⁵¹ El Comercio, 01 mayo 2014. Minería, el nuevo negocio de los carteles mexicanos. <http://elcomercio.pe/economia/mundo/mineria-nuevo-negocio-carteles-mexicanos-noticia-1726535>

⁵² DURAND, Francisco - El Perú fracturado. Formalidad, informalidad y economía delictiva. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2006, p. 91

⁵³ DE LA PEÑA, Guillermo - "Corrupción e informalidad". Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad No. 7 (1996) p. 109-127

⁵⁴ EKKEHARD, Marc ; BUSTAMANTE, Juana - La globalización..., p.73

de forma descentralizada, evitando que esa oferta se siga concentrando en pocas ciudades, y asumidas desde la perspectiva de equidad de género para que hombres y mujeres puedan aprovecharlas por igual, siendo también necesario operar con un criterio de discriminación positiva para aquellos sectores más excluidos, que en ALC son los sectores indígenas. Además, se requieren políticas de formación interculturales que valoren ese saber práctico acumulado y lo enriquezcan desde diferentes enfoques (como el que aporta las nuevas tecnologías de información y comunicación).

Igualmente se requieren políticas de certificación de competencias para que ese conocimiento acumulado pueda ser más reconocido y transferido en el mercado laboral cuando la persona necesite movilizarse hacia otro trabajo, dadas las condiciones cambiantes del mercado laboral de estos tiempos. Se trata de un sistema donde los trabajadores pueden optar por la evaluación de sus competencias, al margen de si estas han sido adquiridas vía la experiencia o no, y que permita certificar como competente a los que aprueban los estándares requeridos, brindando capacitaciones a los que todavía no lo alcancen. Schkolnik, Araos y Machado han logrado sistematizar diversos programas de esa índole en diferentes países de la región que evidencian los avances y problemas que atraviesan para establecer políticas en este campo⁵⁵.

Para promover sociedades más democráticas y menos anómicas es necesario formar ciudadanos más corresponsables con sus Estados, más conscientes de las normas de convivencia y las consecuencias de su trasgresión. Por ello, desde la educación básica y superior es necesario promover una educación ciudadana con tres corrientes educativas estratégicas: educación tributaria, educación en derechos laborales y educación del consumidor. La primera nos sirve para comprender las implicancias de nuestros impuestos en el financiamiento del Estado y sus políticas públicas asumiendo una postura crítica ante la evasión tributaria. La segunda es muy significativa para que trabajadores y empleadores reconozcan estándares básicos de derechos laborales. La tercera apunta a como empoderar al consumidor con derechos y responsabilidades en el mercado y tenga más criterio ético para discernir en sus compras.

Estos tres macro contextos priorizados en este artículo constituyen desafíos extraordinarios para los procesos democráticos de las sociedades latinoamericanas y también para las ciencias sociales y teorías educativas. La posibilidad que estos procesos de democratización, en el campo político, social y económico, se profundicen, depende en gran medida de cómo la sociedad logre revertir la desigualdad y la pobreza, el narcotráfico y la delincuencia, la informalidad y la anomia.

En medio de ese proceso, la educación desarrollada dentro y fuera de la escuela, es un factor sustancial para, junto a otros, empoderar a sujetos e instituciones en su lucha cotidiana por transformar esos tres contextos problemáticos que impiden avanzar en la democratización y cohesión social de las sociedades latinoamericanas.

⁵⁵ SCHKOLNIK, Mariana; ARAOS, Consuelo; MACHADO, Felipe - Certificación por competencias como parte del sistema de protección social: la experiencia de países desarrollados y lineamientos para América Latina. Santiago de Chile: CEPAL, 2005.